**PROYECTO DE LEY No \_\_\_\_ DE 2018 CÁMARA DE REPRESENTANTES**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y EN SERVICIOS, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

El Congreso de la República de Colombia

Decreta

**ARTÍCULO 1º. Objeto.** La presente ley busca reforzar las medidas educativas y de otros derechos a favor de la población con discapacidad.

**ARTÍCULO 2º. Actualización educativa.** El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad y sus diferentes actualizaciones, tendrá el deber de ajustar anualmente toda la normatividad relacionada con la prestación de servicios educativos desde la educación inicial hasta la Universidad, tanto los de educación formal, como no formal, que son ofertados a las personas con discapacidad, en su terminología, conceptos, requisitos, prácticas y procesos.

**ARTÍCULO 3º. En cuanto a los oferentes educativos.** El Ministerio de Educación Nacional tendrá a cargo elaborar y actualizar anualmente, el inventario de toda la oferta de servicios educativos públicos y privados, formales y no formales, que prestan servicios a las personas con discapacidad, independientemente de si están bajo la oferta de educación inclusiva o educación especial, a fin de que el Ministerio los identifique y establezca con ellos estándares básicos de calidad, que deben cumplirse como requisito para continuar en la prestación de servicios a esta población.

Parágrafo: El Ministerio expedirá y actualizará anualmente la lista con las Instituciones de Educación que cumplen con todos los requisitos de una oferta educativa óptima para la población con discapacidad, y dará acceso permanente de consulta a la misma.

**ARTÍCULO 4º. Sobre educación en extra – edad.** Las Secretarías de Educación deberán desarrollar y promover iniciativas flexibles en modalidades y programas pertinentes de calidad, que permitan a la población con discapacidad que no ha sido escolarizada o ha desertado tempranamente y se encuentra en extra – edad, completar sus ciclos de educación. El Ministerio de Educación garantizará el cumplimiento de este objetivo.

**ARTÍCULO 5º. Cupos Educativos.** Las Universidades Públicas, Privadas y el SENA, destinarán como mínimo el 1% de los cupos que ofertan, específicamente para personas con discapacidad. Llevando a cabo acciones afirmativas y de equiparación de oportunidades sin que ello afecte las exigencias académicas de cada institución.

**Parágrafo.** Para el financiamiento de este programa, se contará con recursos que aporte la Nación, los Departamentos, los Municipios y el ICETEX.

**ARTÍCULO 6º. Capacitación docente.** El Ministerio de Educación Nacional definirá los mecanismos para incentivar la formación de profesionales en educación, con énfasis en atención a diversidad de aprendices o la especialización de docentes en dicha materia, a fin de que estos aporten sus conocimientos en atención e inclusión de las personas con discapacidad dentro de las diversas modalidades educativas, incluyendo las aulas regulares.

**Parágrafo 1º.** El Ministerio se encargará de incrementar el número de grupo de rectores, directivos docentes, orientadores y docentes, formados en atención a la población con discapacidad, dentro de las Instituciones regulares de todo el territorio nacional, en concordancia con los requerimientos demandados por la población, de acuerdo con los datos reportados por el SIMAT, el RLCPD y el censo.

**Parágrafo 2º.** Además, el Ministerio establecerá cupos académicos gratuitos, para la formación de profesionales docentes relacionados con la atención integral a la población con discapacidad en las áreas que requieren las Instituciones Educativas, de forma tal que los PEI se fortalezcan.

**ARTICULO 7º. Comité Pedagógico de apoyo.** Las Secretarias de Educación o quien haga sus veces, supervisará que las Instituciones educativas cuenten con personal idóneo para conformar el Comité Pedagógico de apoyo al proceso educativo de los estudiantes con discapacidad. Dicho comité supervisará y garantizará que los estudiantes tengan acceso, ingreso, permanencia, evaluación y egreso al sistema educativo, y que también puedan contar con la oferta artística, deportiva, ocupacional, cultural o social ofertada por la institución educativa, y en la que el estudiante y su familia considere es más productivo. Dicho comité deberá manejar eficiente y oportunamente la relación intersectorial requerida para que los procesos se cumplan

**Artículo 8º. Transversalización de la temática de la discapacidad.** El Ministerio de Educación Nacional deberá transversalizar la temática de la atención educativa a la población con discapacidad en su diseño institucional y en todas sus dependencias, de forma tal que garantice que todos sus servicios, programas, proyectos, resoluciones y reglamentaciones reconozcan las necesidades y existencia de esta población, desde el marco de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad

**ARTÍCULO 9º. Investigación y producción de tecnologías.** El Gobierno Nacional a través de Colciencias, el Sena y las Instituciones de educación Superior, media, vocacional, técnica y tecnológica, incentivará, promoverá y financiará, la producción de tecnología que responda a las necesidades de la población con discapacidad, sustentadas en procesos de investigación educativa de iniciativa nacional, y que permitan incorporar de manera efectiva las tecnologías a favor de mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad.

**Parágrafo**. El Gobierno Nacional, se encargará de establecer los mecanismos económicos para que las tecnologías que surjan de estas investigaciones se puedan financiar para su comercialización en el país.

**ARTÍCULO 10º. Teletrabajo.** Modifíquese el Parágrafo 1º del artículo 3º de la ley 1221 de 2008 el cual quedará así:

*“Parágrafo 1°. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de la Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, formulará una política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable (Personas con discapacidad, personas que tengan a su cuidado a persona(s) con discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su vida). Adicionalmente el Ministerio estará encargado de apoyar el desarrollo de los sistemas de seguridad de información de aquellas empresas que contraten población con discapacidad bajo la modalidad de teletrabajo.”*

**ARTÍCULO 11º. Divulgación y cultura.** A fin de fomentar y divulgar una cultura de respeto y apoyo a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores, los diferentes Ministerios dispondrán en sus planes de comunicación, por lo menos una vez al año, campañas de sensibilización de difusión nacional a favor de la población con discapacidad, en el marco de las directrices de la Política Pública de Discapacidad, o la que haga sus veces.

# ARTÍCULO 12º. Participación en medios de comunicación. EL Ministerio de las TIC’s, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de Televisión, generarán convocatorias conjuntas para que los canales de televisión pública, comunitaria y emisoras, puedan acceder a fondos públicos del Fondo de Comunicaciones, para la creación de programas culturales, novelas e informativos que estén dirigidos a la inclusión social de las personas con Discapacidad, al igual que el reconocimiento de sus derechos y del rol que cumplen sus familias y cuidadores.

**ARTÍCULO 13º. Sistema de Información.** El Gobierno Nacional, diseñará e implementará un sistema informativo de asesoría gratuita para la población con discapacidad, que le oriente sobre sus derechos, deberes, acceso a los servicios, programas, y rutas de acceso a todos los beneficios ofrecidos por el Estado. Para este fin, implementará servicios de interpretación de lengua de señas, audio – descripción, braille y otros apoyos que garanticen el acceso a la información a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores.

**ARTÍCULO 14º. Estampilla Pro – Discapacidad.** Como fuente adicional de recursos para los programas y estrategias a favor de la población con discapacidad, el Gobierno Nacional creará y definirá la estampilla “Pro–discapacidad”.

**ARTÍCULO 15º. Vigencia.** El Gobierno reglamentará los contenidos de la presente Ley, en un plazo inferior a un año, y buscará garantizar que cada de estas disposiciones se cumpla especialmente para la población con discapacidad de los municipios más apartados del país. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

**Ema Claudia Castellanos Ángela Patricia Sánchez Leal**

Senadora de la República Representante a la Cámara

**Honorio Miguel Rodríguez Pinedo**

Senador de la República

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**ANTECEDENTES**

Parte de este proyecto de Ley, tiene su motivación en el proyecto de ley 11 de 2015 Senado, radicado por primera vez el 22 de Julio de 2015, como costa en la gaceta del Congreso número 540 de 2015, por parte de los Honorables Senadores Orlando Castañeda Serrano y Honorio Miguel Henríquez Pinedo. Para continuar el trámite de dicho proyecto de Ley, fueron designados como ponentes los honorables Senadores de la Comisión Séptima de Senado Nadia Georgette Blel Scaff, Sofía Alejandra Gaviria Correa, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Luis Evelis Andrade, Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Orlando Castañeda Serrano este último asignado como coordinador ponente, ponencia para primer debate, que se encuentra en la Gaceta del Congreso No. 283 de 2016, el debate a dicha iniciativa fue desarrollado el 1º de junio de 2016 y aprobado por mayoría de votos.

Posteriormente, fueron asignados los mismos ponentes para segundo debate, ponencia que fue radicada el 11 de noviembre de 2016, según consta en la Gaceta 1053 de 2016, y debatido y aprobado por la Plenaria del Senado el 14 de junio de 2017. Lamentablemente este proyecto de ley fue archivado por no completar el tránsito legislativo de acuerdo con lo que señala la ley 5º de 1992.

Entendiendo la importancia que este proyecto de ley tiene para la población con discapacidad, es que emprendemos nuevamente la tarea de contemplar parte de la iniciativa planteada en el mismo, y radicarla en este proyecto de ley, que esperamos sea nuevamente acogido en las comisiones y plenarias de ambas Cámaras.

Es importante señalar también, que desde el 2011 la Organización Mundial de la Salud, en su último Informe sobre discapacidad señaló que, *“casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento”[[1]](#footnote-1)*, de ahí la importancia que Colombia también profundice en las potencialidades, escenarios y circunstancias en que la población con discapacidad se está desenvolviendo en el país.

Hoy se estima que, alrededor de 1.000 millones de personas sufren de alguna condición de discapacidad, de estas, cerca de 200 mil poseen una dificultad de funcionamiento importante haciéndoles más difícil desarrollar una vida cotidiana saludable y feliz. Además, el incremento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento en el mundo, están aumentando actualmente esta población[[2]](#footnote-2), por lo que no se puede pensar que en Colombia será diferente.

En ese mismo sentido, la OMS también afirma que, la población con discapacidad posee una tasa permanente de crecimiento, viéndose influenciada por *las debilidades de los sistemas de salud, las condiciones ambientales, las catástrofes, las realidades de transporte del país, los conflictos internos, los accidentes, la violencia, los hábitos y condiciones alimentarias, y finalmente el abuso de sustancias psicoactivas*, cada uno de estos elementos además, modifica sustancialmente el entorno psicosocial de la población con discapacidad, y empeora sus condiciones de vida.

A pesar de que, en las últimas dos décadas, el país ha avanzado en este tema, los avances hoy no son suficientes para que la población con discapacidad pueda gozar plenamente de sus derechos, las evidencias han mostrado a lo largo de los últimos años que la segregación espacial, cultural y educativa, continúa siendo permanente, muchas de las normas han sido ineficientes en su aplicación dando origen a interpretaciones subjetivas y no obligantes.

Por lo mismo, no ha existido un avance considerable en el tema que le permita al país ofrecer condiciones más amigables a esta población. No es difícil observar, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades del país, a personas con algún tipo de discapacidad que todavía sufren de un sinnúmero de barreras, entre ellas las de desplazamiento, acceso a los servicios de educación, de salud, además de tener dificultades para la adaptación de una vivienda acorde a su condición, situación que empeora con las dificultades para conseguir un empleo permanente.

**OBJETO DEL PROYECTO DE LEY**

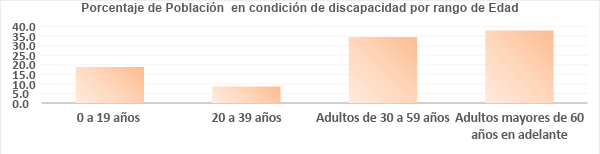
El presente Proyecto de Ley busca incrementar el apoyo a la población con discapacidad, empezando desde de la esfera que más impacta a los más pequeños y vulnerables frente a su discapacidad, la educación, y subsanar parte de las debilidades normativas que se han convertido en barreras de acceso al goce pleno de los derechos y libertades, de la población con discapacidad, de tal manera que la segregación social que puedan padecer sea efectivamente eliminada.

**JUSTIFICACIÓN**

Colombia cuenta con un Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad – RLCPD, diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social desde el 2002, que abarca un importante conjunto de variables. Lamentablemente desde su año de creación “no ha sido sometido a revisión exhaustiva ni ajuste,”[[3]](#footnote-3) además, la inscripción al Registro ha sido de cobertura limitada por lo que no da cuenta realmente de toda la población en condición de discapacidad. Por su parte, el Censo del Departamento Nacional de Estadística – DANE, de acuerdo con lo determinado por el Gobierno Nacional, trasladó al RLCPD las funciones de cuantificación de la población con discapacidad, desde el 2010, sin embargo, la actualización estimada poblacional del 2005 ofrece una estimación en esta población (no necesariamente 100% consistente).

Esta situación ha conllevado a una subestimación de la población con discapacidad y a su precaria caracterización. Con corte al 30 de abril de 2018, se tienen que en el país hay un total de 1´404.108 personas registradas en el RLCPD con discapacidad y 2.033​ Unidades Generadoras de Datos – UGD en funcionamiento[[4]](#footnote-4), es decir, que en el Registro solamente se incrementaron del 31 de mayo de 2017 a abril de 2018, casi 100 mil personas (el Registro a mayo establecía 1´319.864 personas con discapacidad), mientras el DANE registra a 2015, 3´051.217 de personas en esta condición, lo que es equivale al 6,3% del total de la población. Esto permite concluir, que las decisiones de política y las decisiones presupuestales tomadas con base en las cifras del Registro (RLCPD), están dejando por fuera, a una parte importante de esta población, que requiere estrategias y direcciones desde la política que no subestimen a ese 50% que no está siendo objeto directo y pleno de todos los beneficios y programas de los que el Registro es soporte.

Por otro lado, la mayor parte de la población con discapacidad es en casi 40% mayores de 80 años, y en un 20% menores de 19 años; lo que hace a más del 50% de dicha población sujetos de doble condición especial de protección, por ser adultos mayores y niños, de acuerdo con lo señalado por la Corte[[5]](#footnote-5), lo que demanda mayores responsabilidades al Gobierno.



Con base en datos DANE “Reporte discapacidad”

Así mismo, la discapacidad tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres hasta los 44 años, después dicha tendencia se revierte. La alteración más frecuente es en un 20% es la relacionada con la movilidad del cuerpo (discapacidad motora, de brazos, cuerpo y piernas), seguida de, discapacidad visual, del sistema nervioso y del habla. Esto implica que, las estrategias de adecuación y la planificación de lo existente y lo nuevo, deben ir entorno a reconocer esto.

Con base en datos DANE “Reporte discapacidad”

Por otro lado, la cobertura de afiliación al sistema de Salud de la población con discapacidad, de acuerdo con el DANE, llega apenas al 81,9%., lo que revela un déficit de atención de casi el 20% de esta población, lo cual es grave, si se entiende que es una población en condiciones físicas, mentales, o sensoriales vulnerable. La mayoría de esta población se encuentra afiliada al Régimen subsidiado (57,7%), evidenciando posiblemente condiciones de pobreza o desempleo.

El RLCPD, además reporta un número considerable de adultos y niños con discapacidad, que poseen una situación económica precaria. Alrededor del 61%[[6]](#footnote-6) de las personas con discapacidad no percibe ningún tipo de ingreso para subsistir, si a esto se le suma que, en muchos de los casos están “*permanentemente incapacitados para trabajar*”[[7]](#footnote-7), la restricción en el acceso a una pensión se acrecienta, aumentando su vulnerabilidad y la de sus familias, solamente el 28,6% de las personas con discapacidad, mayores de 18 años, tienen ocupación, el 5,9% de los jóvenes y adultos con discapacidad cotiza a pensiones y el 2,2% ya es pensionado; por su parte el 0,6% de los adultos mayores cotizó a pensiones y el 7,1% ya es pensionado. Es por estas razones, que las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso a los insumos, tecnologías y tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. De ahí la importancia de que la ley contemple diferenciales en los beneficios de acceso a educación, trabajo, vivienda, y tecnologías entre otros.

Adicionalmente, el 57,8% de los niños y niñas con discapacidad menores de cinco años permanece con su padre o madre en la casa, 37 de cada 100 niños con esta condición en edad escolar NO asiste a un establecimiento educativo. Según la Encuesta de Calidad de vida 2016, de cada 100 personas con discapacidad, solamente 63,5% saben leer y escribir, y únicamente el 71,3% en edad escolar estudia actualmente. De los niños de 5 a 14 años, solamente lee y escribe el 33%; en los jóvenes, 17% culminan su bachillerato, y 3,4% terminan estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. En la población discapacitada entre 18 y 39 años el 24,7% de encuestados no había alcanzado ningún nivel educativo, exclusivamente el 9,7% alcanzó la Educación superior y el 24,1% es analfabeta. Esto implica ajustar el sistema educativo a una mayor participación de los docentes del país que pueda ayudar a que la población con discapacidad de Colombia participe más activamente en el sistema, y que además se consiga su permanencia; y que los docentes cuenten con los incentivos y ayudas para incrementar el conocimiento a fin de lograr estos objetivos.

Es un hecho, que se ha buscado disminuir la segregación escolar incluyendo a los niños con algún grado de discapacidad en aulas regulares de colegios públicos, lo que no necesariamente se traduce en ausencia de segregación, podría ser incluso todo lo contrario. Si un niño con discapacidad ingresa a una de estas aulas, tanto sus compañeros como los docentes posiblemente carecen de los conocimientos para interactuar con dicha discapacidad, la falta de preparación frente al evento va a generar por si sola segregación, mal llamada inclusión. La inclusión real, debe darse en condiciones donde interactúen los conocimientos, y reconocimientos del entorno, y se les dé a los niños las herramientas para ser incluidos dentro de la sociedad.

En educación superior el tema no es menor crítico, el Ministerio señala: “*en los últimos 20 años no se ha desarrollado un modelo de atención para dicha población*”, entonces los casos exitosos son escasos y poco conocidos[[8]](#footnote-8) y esa situación de estancamiento continua y se acrecienta. Por lo que no se justifica que el Ministerio de Educación diga hoy que se ha hecho suficiente frente a la educación de la Población con Discapacidad.

Es, además, preocupante que, el Informe del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas[[9]](#footnote-9) señala que: “*No hay priorización de las víctimas con discapacidad*”, por lo que los 715 niños y adolescentes reportados con discapacidad de las 152.219 víctimas del Registro Único de Víctimas de conflicto armado, de octubre de 2014, no tendrían una atención prioritaria ni con enfoque de derechos.

**CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY**.

El más reciente Informe de la Organización Mundial de la Salud – OMS, del que ya se ha hablado, sobre la Población con Discapacidad, señala algunos obstáculos principales que padece esta población, incluyendo a Colombia, estos son: *Políticas y normas insuficientes, déficit habitual en las políticas educativas debido a la ausencia de incentivos económicos y de otro tipo orientados a que los niños con discapacidad acudan a la escuela, así como la falta de servicios de apoyo y protección social para los niños con discapacidad y sus familias. Además, actitudes negativas, segregantes y prejuiciosas (en los maestros, administradores escolares, otros niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas convencionales). Problemas con la prestación de servicios de salud, falta de accesibilidad a infraestructuras del país, y ausencia de la participación de la Población con Discapacidad en la toma de decisiones gubernamentales, entre otros.*

Por esta razón, este proyecto de ley que consta de 15 artículos, plantea aspectos necesarios para que la población con discapacidad pueda ser más efectivamente atendida en cuanto a la educación y otros temas importantes, entre los que se contempla:

1. La actualización permanente de la normatividad en conceptos, requisitos, prácticas y procesos para que todas las Instituciones de Educación que ofertan servicios a la población con discapacidad, efectivamente cumplan con la Convención de Derechos de las personas con discapacidad. En este ejercicio el Ministerio establecerá estándares básicos para la prestación de estos servicios, y acorde a ello, creará y actualizará anualmente el listado de Instituciones que cumplen con los mismos, a fin de que la población con discapacidad tenga acceso permanente a la información de oferta educativa óptima.
2. Asignar a las Secretarías de Educación la responsabilidad de generar iniciativas flexibles en programas y modalidades educativas, para la población con discapacidad en extra – edad que no ha culminado sus ciclos educativos.
3. Definir un porcentaje mínimo de un 1% de cupos educativos en las diferentes Universidades del país y el Sena para ser ocupados por personas con discapacidad, sin que ello afecte las condiciones académicas de cada Institución. Para ellos se contará con recursos que aporte la Nación, los Departamentos, los Municipios y el ICETEX.
4. Incentivar por parte del Ministerio de Educación Nacional la formación de rectores, administrativos, personal de apoyo educativo y docentes, sobre atención a diversidad de aprendices, para que estos faciliten la inclusión de estudiantes con discapacidad en las aulas regulares, que estos estén capacitados para enseñar, formar y ayudar a incluir a la población con discapacidad, va a facilitar una inclusión genuina y práctica.
5. Trabajar en un comité pedagógico que realmente fortalezca la educación inclusiva, pues a pesar de que el Decreto 1421 de 2017 para la atención educativa a las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva define los comités técnicos, estos no definen el comité pedagógico, por lo que el proyecto de ley resalta la conformación necesaria de este comité, su idoneidad y su labor. En ese sentido, también el proyecto de ley plantea la importancia de transversalizar la temática de la discapacidad a todas las dependencias educativas.
6. Apoyar la producción de tecnologías en favor de la población con discapacidad, puesto que a pesar de que la Ley 361 de 1997, define algunas obligaciones al SENA, como es la formación de cuidadores, la inclusión efectiva, el servicio de intérprete de lengua, el acompañamiento a empresarios empleadores, la capacitación para el trabajo, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo, entre algunos, NO se habla específicamente de procesos educativos enfocados a la investigación de tecnologías a favor de la población con discapacidad para ser promovida en el país, por lo que se define la obligación al Gobierno Nacional de incentivar, financiar y promover, a través de Colciencias, el SENA y las Instituciones de educación superior la creación de dichas tecnologías, al igual que las estrategias para su comercialización en el país.
7. Fortalecimiento del teletrabajo, a partir de modificar el Parágrafo 1º del artículo 3º de la ley 1221 de 2008, sobre teletrabajo, para que le incluya al original a quienes tienen “*a su cuidado a personas con discapacidad*”. Además, como respuesta a la necesidad de quienes emplean a esta población, se le asigna al el Gobierno la tarea de apoyar el “*desarrollo de sistemas de seguridad de información a las empresas que los contraten*”
8. Fomentar y divulgar la cultura del apoyo y el respeto a la población con discapacidad, mediante campañas emprendidas por los planes de comunicaciones de los diferentes Ministerios por lo menos una vez al año y de difusión nacional.
9. Creación de programas culturales, novelas e informativos que estén dirigidos a la inclusión social de las personas con Discapacidad, al igual que el reconocimiento de sus derechos y del rol que cumplen sus familias y cuidadores, con el apoyo del Ministerio de las TIC’s.
10. Crear un sistema de información permanente y asesoría gratuita para la población con discapacidad.
11. Apoyar el financiamiento de los planes y programas a favor de la población con discapacidad mediante la creación de la estampilla Pro – discapacidad.

Es importante señalar, que la primera versión del Proyecto de Ley 11 de 2015 Senado, que ha dado origen esta iniciativa, fue desde el comienzo nutrida con los aportes, acompañamiento, apoyo, y colaboración de diferentes mesas técnicas y de trabajo, por quienes también esta iniciativa se retoma, a fin de que su esfuerzo logre culminar en una Ley. Agradecemos en ese sentido a las siguientes entidades y organizaciones:

* Dirección del Plan de Inclusión para personas con Discapacidad de la Presidencia de la República en cabeza del Doctor Juan Pablo Salazar.
* La Asociación de Discapacitados del ISS – Liquidado, su vocero Miguel Antonio Camargo
* La Unión de enfermos de General Motors, en cabeza de José Gonzalo Sánchez Melo.
* Y otras asociaciones de discapacitados. Entre ellas las que representan los Señores Juan Rojas y Alexander Meza.

**FUNDAMENTO JURÍDICO**

* [Constitución Política de Colombia. 1991](http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf).  Define que todas las personas deberán ser tratadas en igualdad de condiciones, sin distingo de sus diferencias, además no solo establece que la educación es un derecho, sino que adicionalmente, afirma que nos encontramos en un Estado social de derecho que no es únicamente democrático, sino que también es “*pluralista*”.
* [Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)](http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf) Título III, Capítulo 1, Artículo 46. "*Integración con el servicio educativo*", menciona: *"La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo (…)"*.
* [Ley 361 de 1997](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html) *"Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"*.
* Ley 762 de 2002. “*Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad*”
* Ley 1145 de 2007. "Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones".
* Ley 1346 de 2009. "Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006".
* Ley 1618 /2013*. "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Artículo 11. “Derecho a la Educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. (…)”*
* [Decreto 1860 de agosto 3 de 1994](http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf), Artículo 38. Menciona: *"Con el fin de facilitar el proceso de formación de un alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán introducir excepciones al desarrollo del plan general de estudios y aplicar para estos casos planes particulares de actividades adicionales, dentro del calendario académico o en horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos. De manera similar se procederá para facilitar la integración de alumnos con edad distinta a la observada como promedio para un grado o con limitaciones o capacidades personales excepcionales"*.
* [Decreto No. 2082 de 1996.](http://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2011/09/decreto-2082-de-1996.pdf) *"Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales"*.
* Decreto No 1618 de 2003. "*Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad*".
* Decreto 366 de 2009. "Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva".
* Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. Atención Educativa a las personas con discapacidad. Garantía al derecho a la educación con equidad lo que significa acceso, permanencia y calidad.
* CONPES Social 80 de 2004. Política pública de discapacidad como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006: "Hacia un Estado Comunitario"
* CONPES Social 166 de 2013. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social liderada por el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), el seguimiento a las acciones

**IMPACTO FISCAL**. Si bien es cierto el impacto fiscal evidentemente característico de los proyectos sociales de atención a población vulnerable, se han expuesto las importantes razones por las cuales este proyecto es trascendental para la Población con discapacidad. Además, el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno, sin duda contempla las necesidades de inversión y recursos en el tema, lo cual ha sido respaldado antes por la Dirección del Plan de Inclusión para personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. En ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, establecía:

*“(…) Todas las personas, sin importar su procedencia, grupo étnico, género, edad, o condición de discapacidad, deben tener la posibilidad de acceder a mejores servicios públicos apropiados, lo que implica, condiciones de habitabilidad, vías de acceso para conectarse con las regiones y con el país, un servicio de salud de calidad y una educación que le permita construir su futuro.”*E incluso, fijaba que, el Ministerio del Trabajo debería impulsar el desarrollo de herramientas para la población con discapacidad, en particular en los aspectos de generación de competencias, formación, generación de ingresos y acceso al trabajo. Y que el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de compensación familiar (CCF), la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y las Administradoras de Riesgos Laborales, tendrían que desarrollar programas de formación y de reentrenamiento laboral, para promover la incorporación de las personas con discapacidad a la vida productiva, como trabajadores o como empresarios, según sus competencias, que el proyecto ya contempla mediante el teletrabajo y los cupos en educación y formación.

Por lo que podemos decir, que esta iniciativa permite alcanzar de una manera más eficiente lo propuesto incluso en los planes de desarrollo anteriores.

**PROPOSICIÓN**. En concordancia con los anteriores argumentos, pongo a consideración de los Honorables Miembros del Congreso de la República el presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que el mismo preserva los principios constitucionales de especial protección a la población vulnerable, y está encaminado a proteger los derechos conexos a esta protección con el fin de preservar las condiciones de igualdad y equidad de toda la población.

**Ema Claudia Castellanos Ángela Patricia Sánchez Leal**

Senadora de la República Representante a la Cámara

**Honorio Miguel Rodríguez Pinedo**

Senador de la República

1. Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, “Informe Mundial sobre la Discapacidad”. OMS, Malta, 2011 [↑](#footnote-ref-1)
2. Organización Mundial de la Salud. “10 datos sobre la discapacidad.” Noviembre de 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Propuesta para ajustar el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)” Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Volumen 65, Número 2, p. 283-290, 2017. ISSN electrónico 2357-3848. ISSN impreso 0120-0011 DOI: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.57549 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ministerio de Salud y Protección Social. Registro para la Localización y caracterización de personas con discapacidad – RLCPD

   https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx [↑](#footnote-ref-4)
5. CORTE CONSTITUCIONAL T-513/14 “(…) i) tiene doble calidad de sujeto de especial protección constitucional – adulto mayor y disminuido físicamente-(…)” CORTE CONSTITUCIONAL [T-824](http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/t-824_1910.htm#1)-2010 (…) tiene una doble condición de sujeto de especial protección constitucional en razón a su edad y a su discapacidad (…)” [↑](#footnote-ref-5)
6. RLCPD. Ministerio de Salud y Protección Social. 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Las personas con discapacidad en Colombia. 2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Respuesta a la Posposición 5: “Población discapacitada” 4 de Agosto de 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe del sistema nacional de atención y reparación integran a las víctimas, a las Comisiones primeras de Senado y de Cámara. Marzo de 2013. Bogotá. [↑](#footnote-ref-9)